

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-8841-2022
CARATULADO : SOTO/FISCO DE CHILE - MINISTERIO DE
BIENES NACIONALES

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 24 de agosto de 2022, folio 1, comparecen don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, abogado, y don Eduardo Armando García Ramos, abogado, en representación de don **Víctor Isaías Soto Rojas**, pensionado, todos domiciliados en calle Bandera N° 236, Subterráneo, comuna de Santiago, quienes vienen en deducir demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Podujo, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Con fecha 29 de noviembre de 2022, folio 7, se notificó de forma personal subsidiaria la demanda y su proveído a la demandada de autos, mediante su representante legal.

Con fecha 21 de diciembre de 2022, folio 9, la demandada contestó la demanda deducida en su contra.

Con fecha 26 de diciembre de 2022, folio 13, la demandante evacuó el trámite de la réplica.

Con fecha 05 de enero de 2023, folio 15, la demandada evacuó el trámite de la dúplica.

Con fecha 11 de enero de 2023, folio 16, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los allí señalados, notificándose a las partes por correo electrónico.

Con fecha 20 de enero de 2023, folio 20, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la demandante en contra de la interlocutoria de prueba.

Con fecha 26 de octubre de 2023, folio 33, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 24 de agosto de 2022, comparecen don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, y don Eduardo Armando García Ramos, en representación de don Víctor Isaías Soto Rojas, quienes vienen en deducir demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan



Antonio Peribonio Podujo, todos ya individualizados, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Funda su pretensión en el hecho que el demandante se encuentra calificado como víctima por la Comisión Valech, bajo el número 23.730.

Relata que don Víctor Isaías Soto Rojas, titulado en teatro, mayor de 6 hermanos, a la fecha de los hechos trabajaba en el Comité Metal Liviano de la Corfo, promoviendo la formación y educación de los trabajadores del área pública y el fortalecimiento del área social. Que, fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en circunstancias que dormía en la empresa por el toque de queda y el reciente golpe de estado, cuando fue bombardeado el recinto, entrando violentamente los militares que lo llevaron al patio y manteniéndolo boca abajo hasta las 5 de la tarde.

Agrega que los hicieron subir a unos buses hasta el Estadio Nataniel, luego el Estadio Chile, encontrándose ambos lugares llenos, para finalmente llegar al Estadio Nacional donde estuvo retenido un mes, viviendo un completo infierno, recibiendo insultos y amenazas, en condiciones deplorables, creciendo la desesperación, angustia y estrés de los detenidos, generándose muchos conflictos.

Indica que se encontraba totalmente incomunicado y su familia no sabía nada sobre su paradero, perdiendo la noción del tiempo y teniendo mucho miedo atendido que muchas personas desaparecían luego de ser interrogadas, recordando hasta el día de hoy la violencia y episodios vividos, lo que genera crisis de pánico muy grandes al pensar en su muerte.

Relata que una noche, en medio de la oscuridad, entró en la celda el famoso “enmascarado”, protegido por un grupo de militares, tapado con una capucha negra, quien apuntaba con su arma a alguien que era sacado y no volvía nunca más.

Finalmente, explica fue liberado el 13 de octubre de 1973, luego de un mes detenido, al filo del toque de queda por lo que tuvo que correr a la casa para no volver a ser detenido, destruyendo su vida y viviendo un infierno emocional. Refiere que intentó volver a su lugar de trabajo, pero lo habían despedido, quedando en la miseria económica, terminando como vendedor ambulante de todo lo que pudiera, lo que se volvió más duro luego de casarse y tener un hijo.

Explica que lo vivido lo dejó con una profunda depresión y estrés postraumático, con crisis de pánico, angustia e inseguridad, no pudiendo tratar con profesionales por su falta de dinero, traspasando sus problemas emocionales a su hijo lo que le duele, sintiéndose gobernado por la culpa y la rabia. Es decir, el perjuicio es gigante e inabarcable, arruinaron su alma, su vida, su familia y su salud mental para siempre.

En cuanto al derecho, expone que los hechos relatados se encuadran en crímenes de lesa humanidad, y que la responsabilidad del Estado está originada desde



la Constitución Política de la República, conforme al artículo 38 y en conjunto con los artículos 6 y 7, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, y que conforman el estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado.

Respecto a la responsabilidad del Estado en la esfera del Derecho Internacional, indica que en materia de Derechos Humanos los Estados tienen una obligación de resultado, que es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales. De allí que es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente.

Sobre la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por lesa humanidad, transcribe el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al respecto.

Por otro lado, sobre la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en materia de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, señala que si bien es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se expresa la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la ausencia de regulación impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho, como se ha reconocido por la Excelentísima Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así las cosas, enfatiza que resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano, del cual, Chile, es parte, trae aparejada la obligación de reparar el mal causado, tratándose de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, sancionar a los responsables, y reparar a las víctimas.

Previo a citar jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado por delito de lesa humanidad, expone respecto a la existencia del daño o lesión, la causalidad ya acreditada y el daño provocado y monto de la indemnización, indicando que existe un daño de carácter moral expresado en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia, como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional e internacional que transcribe.

Refiere que por lo mencionado y la complejidad que conlleva solicitar un determinado monto a fin de que haga las veces de reparación integral del mal causado, al ser un daño irreparable que destruyó la vida personal y generó dolor físico y psicológico, solicita la suma de \$200.000.000 para el demandante.



Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del Fisco de Chile, a fin de que se condene al pago de la suma de \$200.000.000, a Víctor Isaías Soto Rojas, por concepto de daño moral, o la suma que se determine conforme a derecho, reajustada de acuerdo a la variación de IPC., desde la fecha de interposición de la demanda y el pago efectivo de la indemnización que se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo periodo y costas;

SEGUNDO: Que, con fecha 21 de diciembre de 2022, la parte demandada contesta la acción deducida en su contra, a través del señor Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, doña Ruth Israel López, solicitando el rechazo de la misma, en base a los siguientes argumentos.

En primer lugar, deduce la excepción de reparación integral - improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizado el demandante, defensa que opone, atendidas las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y a los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, haciendo presente al efecto que la Ley N° 19.123, así como otras normas jurídicas conexas, en su conjunto han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a tales víctimas y familiares, estableciéndose al efecto los siguientes mecanismos: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Así en término generales para el Estado de Chile, dicho tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, las siguientes sumas de dinero: a) Pensiones: La suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123; b) Pensiones: La suma de \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992; c) Bonos: La suma de \$41.910.643.367, asignada por la ley 19.980, más la suma de \$23.388.490.737, por la ley N° 19.992; c) Desahucio (Bono Compensatorio): la suma de \$1.464.702.888, asignada por la ley N° 19.123; y d) Bono Extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$23.388.490.737.

En síntesis, a diciembre de 2019, el Fisco de Chile ha desembolsado un total de \$992.084.910.400.

En la especie, indica que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; la suma de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad, y la cantidad de \$1.549.422, para mayores de 75 años de edad. Adicionalmente a los montos antes referidos, la ley 20.874, determinó un aporte único de reparación por \$1.000.000, para cada una de las víctimas individualizadas en las nóminas Valech.



Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, destaca la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La reconstrucción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo al demandante, no sólo han cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que se han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera, las que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

En efecto, indica que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado, por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Estando entonces la acción deducida en autos basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, así como el tenor de los documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, se opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

En segundo lugar, en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción invocada en la demanda, toda vez que de acuerdo al relato del actor la detención ilegal y torturas que sufrió, tuvieron lugar desde el día 13 de septiembre al



13 de octubre de 1973, en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte sólo con fecha 29 de noviembre de 2022, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la Dictadura Militar.

En subsidio y, para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515, por cuanto entre la fecha en que se habrían hecho exigibles los supuestos derechos a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Previo análisis de jurisprudencia sobre la prescripción, agrega que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de Derecho Internacional de Derechos Humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En tercer lugar, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas y, en subsidio, de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, solicita que la suma de \$200.000.000 se rechace, por cuanto la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. En tal sentido, hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica de la demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente.



En cuarto lugar, en subsidio de las excepciones precedentes, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, pues su finalidad fue precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por el demandante en su libelo, esto es, desde la notificación de la demanda, por cuanto mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, solicita al Tribunal tener por contestada la demanda de autos, y con su mérito, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, y en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido;

TERCERO: Que, con fecha 26 de diciembre de 2022, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica.

Señala que la demandada realiza un reconocimiento respecto de los hechos en que se funda la presente demanda.

En cuanto a la excepción de reparación integral, expone que no resulta concordante con la Carta Fundamental, basarse en la ley 19.123 y especialmente en la ley 19.992 sobre prisioneros y torturados políticos, para decir que el daño moral ya está reparado, ya que llevaría a la conclusión que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, lo que es abiertamente inconstitucional, además de haber fijado el monto de reparación de forma unilateral y arbitraria por él.

En cuanto a la improcedencia de la expresión de prescripción extintiva, enfatiza que el estatuto legal aplicable al caso concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por el país y las normas vigentes, no puede ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre particulares.

Respecto al monto demandado, reitera que no hay dinero que supla el dolor experimentado por su mandante, y respecto a la procedencia del cobro del reajuste,



indica que está ligada a la garantía de la reparación integral o plena y del pago efectivo de las obligaciones.

Respecto a la procedencia del cobro de reajustes, indica está ligada a la garantía de la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones, y la desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como el IPC;

CUARTO: Que, con fecha 05 de enero de 2023, la demandada evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en el escrito de contestación de la demanda, agregando jurisprudencia nacional al respecto;

QUINTO: Que, con fecha 11 de enero de 2023, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los allí señalados, notificándose a las partes por correo electrónico.

Con fecha 20 de enero de 2023, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la demandante en contra de la interlocutoria de prueba;

SEXTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió prueba instrumental, consistente, en lo pertinente, en:

1.- Copia de escritura pública de fecha 01 de agosto de 2022, otorgada ante el Notario Titular de San Miguel doña Esmeralda Luz Muñoz Iglesias, Repertorio N° 876-2022, Mandato Judicial de Víctor Isaías Soto Rojas a Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y otro;

2.- Copia de nómina de prisioneros políticos y torturados, destacado especialmente en el N° 23.730;

SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada acompañó únicamente copia de Resolución Tra N° 45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 30 de agosto de 2017, relativa al nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, en calidad de abogado Procurado Fiscal de Santiago;

OCTAVO: Que, el tribunal, a solicitud de la parte demandada ordenó la siguiente diligencia probatoria:

1.- Ord. DSGT N° 4792-11331, emitido por el Instituto de Previsión Social, Departamento Gestión de Beneficios, Unidad Valech, Rettig y otros Beneficios Reparatorios, respecto de don Víctor Isaías Soto Rojas, en calidad de víctima, emitido con fecha 13 de enero de 2023. Dicha diligencia se encuentra acompañada a los autos con fecha 17 de enero de 2023, a folio 19;

NOVENO: Que, el Tribunal, con fecha 31 de octubre de 2023, decretó como medida para mejor resolver, tener por acompañados los siguientes documentos:

1.- Copia expediente de don Víctor Isaías Soto Rojas, timbrado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;



2.- Copia de informe psicológico de don Víctor Isaías Soto Rojas, emitido por la Psicóloga Bárbara Álvarez Rodríguez;

3.- Copia de declaración jurada de fecha 28 de marzo de 2023, de doña Bárbara Camila Constanza Álvarez Rodríguez, ante Notario Público;

4.- Copia de título profesional de doña Bárbara Camila Constanza Álvarez Rodríguez;

DÉCIMO: Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que don Víctor Isaías Soto Rojas, fue detenido en su lugar de trabajo Comité Metal Liviano de la Corfo, el 13 de septiembre de 1973, siendo trasladado al Estadio Nacional, permaneciendo detenido durante un mes hasta el 13 de octubre de 1973, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes;

2.- Que, don Víctor Isaías Soto Rojas, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, Registro N° 23.730;

3.- Que, don Víctor Isaías Soto Rojas, ha obtenido los siguientes beneficios de reparación contemplados en: pensión Ley N° 19.992 por \$34.469.115, aporte único por \$1.000.000 y aguinaldo por \$609.685, lo que da un total pagado de \$36.078.800, siendo la pensión actual de \$251.517, lo anterior, a la fecha de emisión del oficio respectivo el 13 de enero de 2023;

UNDÉCIMO: Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por don Víctor Isaías Soto Rojas, en contra del Fisco de Chile, en atención al daño sufrido producto de su detención y tortura en manos de agentes del Estado, quien fuera reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos, por la denominada Comisión Valech I, solicitando una indemnización ascendente a \$200.000.000 por concepto de daño moral o lo que el Tribunal estime pertinente.

Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo excepción de reparación integral, por cuanto la actora ha sido reparada mediante desagavios de carácter económico, simbólico y en programas; y haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;



DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la denominada “excepción de reparación integral” que opone la demandada, por haber sido resarcido el actor en conformidad a la Ley N° 19.123 y N° 19.980, cabe señalar que si bien consta en Ordinario N° 4792-11331, de 13 de enero de 2023, del Instituto de Previsión Social, que don Víctor Isaías Soto Rojas ha recibido beneficios concedidos en las Leyes N° 19.992 y 20.874, por un total de \$36.078.800 a la fecha -sin perjuicio de la pensión mensual que sigue percibiendo, ascendente a \$215.517-, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta Magistrado- con una reparación meramente simbólica;

DÉCIMO TERCERO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del



Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que “... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada;

DÉCIMO CUARTO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión de actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.



Que, como ya se adelantó, en el motivo décimo precedente, es un hecho de la causa que el demandante fue detenido el día 13 de septiembre de 1973, desde las dependencias de su trabajo, siendo trasladado al Estadio Nacional donde fue interrogado, torturado, y sometido a apremios ilegítimos, hasta que salió en libertad un mes más tarde el 13 de octubre de 1973, siendo despedido de su trabajo y, por tanto, viviendo una precaria situación económica. Que, por lo anterior, el actor fue calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal.

Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Víctor Isaías Soto Rojas.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los Derechos Humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los Derechos Humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico



interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

DÉCIMO QUINTO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

DÉCIMO SEXTO: Que, en orden a acreditar su existencia y evaluación, consta como medida para mejor resolver prueba documental que da cuenta, de las secuelas psicológicas y emocionales que presenta al día de hoy.

Así, consta del informe psicológico de don Víctor Isaías Soto Rojas, emitido por la profesional Bárbara Álvarez Rodríguez, el cual concluye que el paciente en la actualidad está atravesando por síntomas asociados a un trastorno de estrés postraumático, en relación a la vulneración de sus derechos fundamentales, limitando oportunidades laborales y expectativas personales, destacando el trauma por ser víctima de violencia física y psicológica grave. Que tales dinámicas derivan en un trauma psicosocial, con consecuencias en aspectos psicológicos, sociales, laborales, de



realización personal, autoestima e identidad, bajo un contexto socio-político-económico en la particular;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, si bien la privación de libertad y tortura, en el contexto que se ha reseñado, resulta difícil de calcular y cuantificar, el Tribunal lo regulará prudencialmente en la cantidad total de veinte millones de pesos (\$20.000.000), reiterando lo ya referido en las motivaciones precedentes y haciendo presente que si bien la privación de libertad por motivos políticos y sin causa justificada constituye de por sí una grave violación a los Derechos Humanos, en este caso aquella se prolongó, a saber, aproximadamente por un mes, lo que importa un menoscabo a los Derechos Fundamentales de todo ser humano, y que se condice igualmente con las indemnizaciones fijadas por esta juez en casos análogos;

DÉCIMO OCTAVO: Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia quede ejecutoriada y con intereses desde que se constituya en mora al deudor;

DÉCIMO NOVENO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve:

a) Que **se rechazan** las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por la demandada;

b) Que se acoge, parcialmente, la demanda de lo principal de 24 de agosto de 2022, folio 1 y, en consecuencia, **se condena al Fisco de Chile** a pagar a título de daño moral, la suma de veinte millones de pesos (\$20.000.000), a favor del demandante don Víctor Isaías Soto Rojas, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo octavo precedente;

c) Que **se exime de pago** de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelar.

Notifíquese por correo electrónico a la parte demandante y demandada, otorgándose la nomenclatura pertinente para su correcta visualización en el sistema computacional.



C-8841-2022

Foja: 1

Rol N° C-8.841-2022.

Pronunciada por doña **Soledad Araneda Undurraga**, Juez Titular.

Autoriza doña **Ximena del Pilar Andrade Hormazábal**, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. En **Santiago, diez de Noviembre de dos mil veintitrés.-**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LZZYXJWLSBK